



Ignacio Mujica —socio de VGC, uno de los estudios con mayor experiencia en derecho medioambiental— viajó hace un tiempo a Polonia, para trabajar con otros abogados y fiscales de Kiev en la estrategia que se podría implementar ante el llamado “ecocidio ucraniano”; posibles crímenes de guerra, contra el medio ambiente, en medio del largo conflicto que, en estos días, podría llegar a su fin. POR SERGIO PAZ

**Ignacio Mujica**, abogado, tomó un avión y llegó a Cracovia. Desde ahí partió al sureste de Polonia y, en un hotel en Rzesow —la linda ciudad junto al río Wislok, a solo 50 kilómetros de la frontera con Ucrania— se reunió con profesores y académicos, expertos en derecho medioambiental, mayormente vinculados a tribunales internacionales.

El objeto del encuentro era (y es) complejo. Entre juguetos, café y galletitas, debían diseñar una estrategia global para, en el futuro, llevar a líderes rusos ante la Corte Penal Internacional por su responsabilidad en el grave daño medioambiental en Ucrania durante la guerra.

—Si Rusia resultara condenada por crímenes de guerra en contra del medio ambiente —dice Ignacio Mujica— sería un paso histórico. Nunca antes ha ocurrido algo así.

Los datos están en la mesa y van desde la destrucción de 12 mil kilómetros cuadrados de reservas naturales, pasando por la contaminación del mar de Azov, hasta la carga con metales pesados en el Donbás, lo cierto es que no es lo mismo que, en una guerra, haya daño producto de las hostilidades que destruir una represa, un río, para generar daño medioambiental. Y sacar ventaja del caos.

—Aunque según el Estatuto de Roma hay tipos penales que se pueden perseguir si se califican como ataques al medio ambiente, es súper difícil establecerlo. Es más, nunca en la historia se ha aplicado. Lo más cerca fueron las discusiones por el uso del “agente naranja” en Vietnam; un mutágeno que terminó destruyendo bosques, la salud de los niños y la biota de todo el país —explica Ignacio.

Al hotel polaco llegaron en bus, provenientes de Ucrania, los fiscales y expertos en derecho medioambiental. La IBAR, organismo dependiente de los Colegios de Abogados del mundo, había organizado el encuentro de modo que pudieran llegar los ucranianos. Y también extranjeros, como el propio Ignacio que trabajaba en una comisión *ad hoc*; y admite haber estado un poco nervioso por encontrarse al otro lado de la frontera de un territorio en guerra.

Al poco rato —recuerda Mujica— comenzaron a sonar las alarmas de los celulares. Todos tenían —dice— esa *app* en la que pones la dirección de tu casa y te advierte cuánto tiempo tienes para encontrar un refugio antes de que empiecen a caer los misiles.

—Esta es la verdadera ruleta rusa”, fue lo que le dijo un abogado ucraniano a Mujica cuando recién lo conoció.

—Es la normalización del horror. Algo completamente ajeno a lo que vivimos en Latinoamérica —dice el chileno, ya de regreso en Santiago.

Son las diez de la mañana y, en sala de reuniones del estudio de VGC —alguna vez los abogados que defendieron a Hidroysén— converso con Ignacio Mujica, el joven abogado —egresado de la Universidad de Chile, con maestría en Yale— que partió trabajando en el Ministerio del Interior, en causas de derechos humanos. Específicamente en las ejecuciones extrajudiciales, desde 1979 (cuando se acaba la DINA y se crea la CNI) hasta 1990. Todas las cuales, por acuerdo político, debían seguir tramitándose tras el Informe Rettig.

Sobre la mesa hay un paquete de galletas de barquillo, tipos galletas Amor; mis favoritas.

—Entiendo que uno de los principales problemas en Ucrania fue la destrucción de Nova Kakhovka, la represa más grande que tenían. El Estado ucraniano prepara las pruebas para llevar el caso a la Corte Penal Internacional, considerándolo un crimen de guerra.

—Estamos hablando de una represa de decenas de kilómetros de largo y que ocupaba unas 500 mil hectáreas de campo, en las que estaba plantado trigo, girasoles, en fin. Aparte tenía una central eléctrica. Y aguas abajo muchos humedales, áreas protegidas.

—¿Y qué pasó?

—Los rusos detonaron la represa. Se generó una discusión y los rusos salieron diciendo que no habían sido ellos, sino los mismos ucranianos. Pero yo revisé ese caso y no me cabe la menor duda de que fueron los rusos. Ellos la minaron y la destruyeron por dentro. No había misiones que pudieran destruir un muro de 4 metros de concreto.

—¿Pero y cómo sabes que fueron los rusos?

—¿Usas Telegram?



“En general, en Ucrania, hoy sabemos que hubo ataques destinados a impactar el medio ambiente de una manera completamente desproporcionada”, asegura el abogado.

—No, pero veo lo de Karol Cariola y pienso que debería...

—Lo usas mucho en Rusia, incluidos los militares. Ellos tenían trazado un sistema de comunicaciones y en Telegram, antes de la tragedia, se dijo que había que salir del lugar porque iba a pasar algo. Estaba claro que había un plan para destruir la represa. La minaron por dentro y la detonaron. La estación eléctrica también voló por completo. No es la primera vez que ocurre. Cuando las tropas soviéticas empezaron a replegarse en 1941, en medio de la invasión nazi, ellos mismos destruyeron la represa. Para ralentizar el avance de los alemanes. Pero no tuvo mayor efecto y unos años después, cuando los rusos expulsaron a los nazis, ellos la volvieron a destruir. O sea, se da la situación de que, en ese lugar, ya se habían constatado dos inundaciones masivas.

—Sabotaje.

—Exactamente. Y ahora empiezan las investigaciones para saber quién está detrás de las decisiones para que algo así de *power* ocurra.

—Durante años, en Ucrania, se ha hablado de las minas de carbón del Donbás y el desastre ambiental que quedó en ellas luego que se inundaran y, con ello, se contaminaran las napas.

—Sí, y hoy eso está bien documentado. La discusión que se ha generado es si los agentes que estaban ahí tenían o no la capacidad de controlar esas minas de carbón. Que se inundaran... ¿Fue dejación, negligencia o una política destinada a generar lo que pasó? Es una pregunta fáctica y hay que investigar para determinarlo.

Hasta donde entiendo, uno de los problemas fue que, hacia 1979, a alguien se le ocurrió la genial idea de lanzar una pequeña bomba nuclear dentro de la mina de carbón de Junkom, para así liberar gas metano. Sin embargo, la idea no funcionó y la zona quedó altamente contaminada, aunque contenida. El punto es que, para mantener eso así (y además sacar el agua de otras minas que se estaban cerrando) se instaló un sistema de bombas que evitaba el contacto del agua con los acuíferos colindantes. Lamentablemente, en algún minuto, las bombas dejaron de funcionar y la contaminación empezó a esparcirse hacia el territorio ucraniano.

Hoy no pocos se hacen preguntas: ¿Alguien lo planeó? ¿Fue un crimen de guerra?

—¿Qué otra gran afectación medioambiental conociste en la reunión a la que fuiste?

—Hay un tema que está muy bien documentado y del cual *The Guardian* hizo una profunda investigación. Se trata de un río que cruza desde la frontera rusa hasta Ucrania y es una de las fuentes de abastecimiento de agua para Kiev. Un río muy fértil en el que empezó a aparecer lodo contaminado. Luego se identificó que en la zona había una planta de procesamiento de azúcar y dentro de ella una piscina en la que se acumulaban residuos industriales, que terminaron descargándose en el río. Entonces, de nuevo... ¿Fue negligencia? ¿Alguien no mantuvo la fábrica? ¿O acaso alguien la voló para generar un desastre aguas abajo? En general, en Ucrania, hoy sabemos que hubo ataques destinados a impactar el medio ambiente de una manera completamente desproporcionada.

—Y en una discusión así, ¿cuál podría ser el aporte desde la experiencia chilena o latinoamericana?

—En Latinoamérica, en relación a los derechos humanos, tene-

mos una lección súper importante que es que, si quieres hacer justicia, en casos límites, cuando tienes impedimentos gigantes, debes apostar a una estrategia que durará 30, 40 años. En Ucrania no lo podrán hacer ahora, del mismo modo que en Chile no se pudo hacer en los 70 u 80. El aprendizaje fue claro; si quieres hacer justicia, tienes que trabajar muy duro en, por ejemplo, asegurar solicitudes de extradición, etcétera.

—Y al contrario, ¿qué conclusiones para Chile pueden quedar de un desastre medioambiental como el que se generó en Ucrania por la guerra?

—En Chile uno se siente muy alejado de algún conflicto armado. Parece impensable vivir algo así. Por eso me quedo con la sensación de que una gran lección es que cada contexto es propio, pero sí puede ser útil para los que observamos. En ese sentido, puedo decir que en Chile tenemos un estándar de derecho ambiental muy alto.

—Ese hubiera sido un buen chiste en Viña.

—Tenemos una Superintendencia de Medio Ambiente que hace muy bien su trabajo y con altísimas exigencias. En Chile tenemos una institucionalidad ambiental que funciona.

—Sigue el chiste.

—¿Qué es chiste?

—En Domingo vamos en... ¿el cuarto, quinto comité de ministros? Ya nadie entiende en qué estamos. ¿Se hace o no se hace Domingo? La institucionalidad ambiental chilena es un despoleta.

—Es un enredo, pero eso no significa que no haya institucionalidad. Tengo una opinión distinta. Y más allá de que en casos específicos haya habido chambonadas, tenemos una institucionalidad ambiental, con facultades que no hay en otros países.

—Okey, pero al final vivimos en un país contaminado. Yo vivo junto a la playa y, todos los días, respiro metano debido a la proliferación de algas por aguas servidas. ¿Dónde está la institucionalidad?

—Si tienes una experiencia personal, no te voy a convencer. La mía es distinta y desde ella y de los grandes números, puedo decir que tenemos una institucionalidad medio ambiental como no la tiene ningún otro país en Latinoamérica. De eso podemos concluir que, pese a lo lejano que está Ucrania, hay lecciones locales que sí podemos transmitir a ellos y a otros.

—Ya que hablamos de derecho medioambiental y eres un experto, ¿cuál es, finalmente, el gran conflicto en esto?

—Creo que, en un escenario de cambio climático, es definir cuál es el modelo de desarrollo que queremos tener.Cuál es el que nos permita detener ese cambio y, al mismo tiempo, lograr la sostenibilidad de la sociedad que queremos.

—Y en el centro de eso aparece el problema de la mal llamada “permisología”?

—Esas etiquetas no ayudan a entender lo que está detrás. Tendremos proyectos e inversión, pero tenemos que decidir cómo conciliar eso con los intereses de las comunidades locales y con el desarrollo sostenible. ¿Cómo se resuelven todos los intereses? Al final es un puzzle complejo.

—¿Y cuál sería ese punto de encuentro?

Silencio. En la mesa ya no hay más galletas amor. El entrevistador se las comió todas.

—Al final no solo en Ucrania hay una guerra...

—Yo creo que no, y eso es parte del problema. En el fondo, lo ambiental no es un conflicto que no tenga solución por vías razonables.

—Pero, cuando es algo medioambiental e interesa, se entra con casco o no se entra.

—Es que ahí está el problema, si hay una gran conflictividad es imposible encontrar soluciones. No vas a poder tener un buen desarrollo corporativo, ni habrá soluciones consensuadas. Al final la institucionalidad está hecha para lidiar con conflictos racionales.

—La guerra es irracional.

—No, la guerra es la conducción de la política por otros medios. No hay una irracionalidad ahí. Y eso es lo terrible. Un conflicto político lo llevas a tal nivel que finalmente se transforma en un daño a la gente. Y, bueno, al medio ambiente

—Entonces, la respuesta a la pregunta que quedó pendiente es...

—El punto de encuentro son canales de comunicación transparentes, que sean idóneos para movilizar las preocupaciones sociales, privadas y fiscales de modo de poner todo transparentemente sobre la mesa y no terminar ensartados en un juicio de diez años o más. 5